

LA JERARQUÍA ECLESIAÍSTICA COLOMBIANA Y EL PROCESO DE PAZ DE BELISARIO BETANCUR (1982-1986)

Ricardo Arias, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.

El llamado Proceso de Paz de 1982 a 1986 marca, sin lugar a dudas, una nueva etapa en el desarrollo de ese capítulo tan particular a la historia colombiana, la violencia. Innumerables artículos, varios libros y un sin fin de comentarios sobre esta iniciativa del expresidente Belisario Betancur, parecen corroborar la inmensa importancia de un proyecto innovador cuyo alcance se sigue apreciando hoy en día.

No obstante, son numerosos los aspectos del proceso que aún quedan por analizar. Dificultades ligadas a la historia inmediata justifican, en cierta medida, aquellos vacíos que hoy impiden forjarse una visión menos confusa y caótica de ese fenómeno tan complejo como la violencia colombiana. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que un actor de primera importancia dentro de la historia de la violencia en el país haya permanecido al margen de los estudios consagrados a este tema: se trata de la Iglesia. No se quiere decir con esto que hasta el día de hoy el papel jugado por la Iglesia haya sido completamente ignorado: a falta de un abundante material, existen unos cuantos estudios sumamente esclarecedores sobre lo que ha sido la relación Iglesia-violencia en Colombia. Pero se trata, de manera general, de investigaciones que no van más allá de los años sesenta del presente siglo.

Es indudable que el Proceso de Paz del exPresidente Betancur constituye una magnífica oportunidad para interrogarse acerca del papel desempeñado por la Iglesia colombiana. De la misma manera como sucede en otras naciones latinoamericanas, el clero de nuestro país quisiera ocupar un lugar protagónico en las iniciativas tendientes a solucionar los conflictos entre Estado y sectores contestatarios.

Un detenido análisis de la actitud asumida por la jerarquía eclesiástica colombiana durante el Proceso de Paz del entonces Presidente Betancur, arroja

ciertas luces sobre una de las instituciones que con mayor fuerza se ha hecho sentir a todo lo largo de la historia del país. Dentro de esta perspectiva, el siguiente trabajo pretende demostrar que, lejos de aquella imagen de armonía y unidad que nos describen continuamente sus portavoces oficiales, la Iglesia colombiana se halla profundamente dividida. En el fondo, se puede apreciar que el Proceso de Paz desarrollado por Betancur desencadenó una relación de fuerzas en el seno de las autoridades eclesiásticas. La descripción de dicha relación será el objeto central de la presente investigación. ¿Cómo reaccionaron los diferentes representantes de la jerarquía católica ante una iniciativa gubernamental que comenzó por reconocer y, hasta cierto punto, por justificar la existencia de la subversión armada? ¿De qué manera participaron en los múltiples y álgidos debates que se desarrollaron en torno a las soluciones susceptibles para conseguir la paz?

Para responder a estos interrogantes existían varias alternativas de investigación; se optó, sin embargo, por el seguimiento pormenorizado del órgano oficioso de la jerarquía eclesiástica, El Catolicismo. A través de este semanario, y con la ayuda de otros diarios, se podrán encontrar las dos posiciones -netamente radicales- en que se dividieron los obispos: aquellos que, apoyando el Proceso de Paz, privilegiaron explícitamente el diálogo con la guerrilla; de otra parte, aquellos que, advirtiendo a la opinión pública sobre la doble estrategia de los grupos guerrilleros -negociar en apariencia, para así fortalecer sus intereses-, criticaron desde un comienzo todo esfuerzo encaminado a facilitar el acercamiento entre el gobierno y los alzados en armas.

Esta división interna de la jerarquía eclesiástica colombiana sufrió, sin embargo, una evolución durante el Proceso de Paz; en efecto, se puede observar que El Catolicismo, en un momento determinado, sin dejar de condenar a los movimientos guerrilleros, comienza a lanzar una serie de críticas, cada vez más directas, contra otros estamentos de la sociedad, a los que anteriormente había defendido, como a la clase política tradicional y a las Fuerzas Armadas. Esa actitud crítica por parte de un sector cada vez más numeroso de la jerarquía eclesiástica frente a los errores del Estado se ha seguido observando hasta nuestros días¹.

I.-La jerarquía eclesiástica antes de la puesta en marcha del Proceso de Paz:

1) Betancur y la jerarquía eclesiástica:

Con la llegada al poder en 1982 de un representante del partido conservador, los altos prelados de la Iglesia colombiana, en su conjunto, manifestaron abiertamente su complacencia. Varias razones explican ese sentimiento de satisfacción. En primer lugar, durante la campaña electoral, Belisario Betancur, contrariamente al resto de candidatos, no había mostrado intención alguna de modificar ciertos aspectos de la vida civil, particularmente sensibles a las autoridades religiosas, tales como el matrimonio civil, el aborto, el divorcio, el Concordato, etc. Un segundo motivo por el cual las autoridades eclesiásticas se mostraron ampliamente satisfechas con la elección de Betancur, se explica por la posibilidad de poner término a la enorme corrupción estatal, que se había agudizado durante el gobierno saliente (Turbay Ayala). Se trataba, en general, de una crítica tanto al despilfarro oficial de los dineros públicos como a la práctica desmesurada del clientelismo². Pero dentro de la óptica de El Catolicismo, este comportamiento revelaba un problema muchísimo más grave: la pérdida de los valores morales. Según el semanario, la ausencia de los principios morales condujo inevitablemente a un estado de inmoralidad que se apoderó de amplios sectores de la sociedad. Y dentro de este contexto, la Iglesia, al señalar la inmoralidad como la fuente de todos los problemas, justificaba plenamente su rol de protagonista principal en la designación de

verdaderas soluciones. A través de su orientación de tipo moral, la Iglesia justificaba su intervención en los más variados aspectos de la vida nacional. Pero a partir de estos planteamientos, surge una inquietud: al afirmarse categóricamente que es la inversión de valores lo que ha llevado a la sociedad colombiana al caos en que vive, es necesario preguntarse acerca de los posibles responsables de este estado de inmoralidad: ¿no es acaso la Iglesia aquella institución que, como primerísima función, tiene la tarea de encauzar la comunidad dentro de los parámetros morales del catolicismo? ¿Cómo explicar, en consecuencia, que los colombianos se hayan alejado de tales preceptos?

La Iglesia en su conjunto apoyó al candidato Betancur por las razones antes expuestas; pero cuando el Presidente Betancur anunció al país que el problema con la guerrilla se iba a solucionar a partir del diálogo, un sector de la Iglesia, al que se le conoce como el ala conservadora o pre-modernista, comenzó rápidamente a retirarle su apoyo a Betancur.

2) Belisario Betancur: una nueva concepción de la violencia El representante del partido conservador iba a asumir sus funciones en un contexto que se caracterizaba, en particular, por múltiples formas de violencia, dentro de las que se destacaba aquella que provenía del enfrentamiento entre las distintas guerrillas y el Estado. Ante el programa del candidato oficial del partido liberal, que aparte de proponer importantes enmiendas al Concordato, afirmó que la paz era liberal, la Iglesia prefirió apoyar de manera masiva la paz nacional de Betancur. Pero lo que merece ser destacado es que fue sólo el día en que tomó posesión de su cargo que el nuevo presidente presentó, sorprendiendo al país -guerrilla incluida³, su plan de paz. Sorpresa, en primer lugar, porque en una sociedad que, en su mayoría, siempre había desaprobado a la guerrilla y en la que el ejército había hecho primar la respuesta militar en detrimento de la política, pocos cambios se podían esperar; sorpresa también, y enorme, ante la estrategia en sí. Betancur, adoptando una posición con-

1 Durante los gobiernos de Barco y Gavirja la Iglesia ha asumido una posición mucho menos complaciente frente al Estado; por otra parte, hay que resaltar que muchos de sus voceros oficiales han venido ejerciendo, desde la administración Barco, una gran presión en favor de la reanudación de los diálogos con la guerrilla.

2 El Catolicismo, 23 de mayo de 1982.

3 Ramírez Socorro y Restrepo Luis A., Actores en conflicto por la paz, Bogotá, Siglo XXI-Cinep, 1989, p. 151.

ciliadora, en la que se destacaba el diálogo con la subversión como herramienta central para conseguir la paz, se alejaba de manera radical de la actitud netamente represiva asumida por los gobiernos anteriores. Para el nuevo jefe del Estado, esta actitud conciliadora tenía su origen en los serios problemas estructurales que aquejaban al país desde hacía tantas décadas: injusticia social, monopolio del poder por parte del bipartitismo tradicional. En la óptica del mandatario, el problema de fondo lo constituía no tanto la guerrilla en sí como la falta de equidad (causas objetivas del conflicto) que caracterizaba a la sociedad colombiana. Es decir, el presidente de la República establecía una relación directa entre las paupérrimas condiciones de vida de muchos colombianos, la falta de representación política de amplios sectores de la población y la existencia de focos guerrilleros.

Independientemente del juicio *a posteriori* que se le quiera dar a esta tentativa, nos parece que el proceso de Betancur marca un giro radical con respecto a las políticas de paz de los gobiernos anteriores. En primer lugar, porque reconoció explícitamente que el contexto socio-político estaba estrechamente ligado al clima de violencia; y, en segundo lugar, porque señaló una estrategia de paz consecuente con dicho postulado, estrategia que no solamente ha sido retomada por los gobiernos que han sucedido al de Betancur, sino que, además, en este corto tiempo, ha sido ampliada a otros actores de la violencia (narcoterrorismo, narcotraficantes).

Sin embargo, la concepción de Belisario Betancur contrastaba fuertemente con la que ciertos sectores de la sociedad se hacían de la subversión. En realidad, se presentó un problema de fondo en torno a la concepción del conflicto guerrilla-Estado que, desde los inicios mismos del Proceso de Paz, dividió radicalmente a los colombianos en dos bandos: por un lado, aquellos que, como el Presidente (intelectuales, algunos sectores universitarios, ciertos periodistas, artistas, etc.), estimaban que para resolver ese tipo de violencia era indispensable acabar, a través de un programa de reformas que debía ser

discutido previamente con la guerrilla, con las múltiples injusticias que condenaban a la mayoría de los colombianos a ser ciudadanos de segunda categoría. Y, por otro lado, estaban aquellos que se negaban rotundamente a que se negociara con una guerrilla, tan sólo preocupada, según ellos, por sus propios intereses. En efecto, para el conjunto de la Fuerzas Armadas, la mayoría de los obispos, gran parte de la ciudadanía y para la clase política tradicional, la cuestión de la guerrilla se planteaba de manera muy distinta. Puesto que los alzados en armas no representaban de manera alguna a los colombianos, difícilmente el gobierno podía sentarse a dialogar y menos aún a negociar con ellos. Para estos sectores, el problema radicaba en los intereses del comunismo internacional que, entre sus intenciones expansionistas, tenía el firme propósito de convertir a Colombia en un punto estratégico para extender la doctrina marxista en el resto del continente⁴.

El rechazo a todo tipo de negociación entre el Estado y los alzados en armas se hace más abierto una vez que el Proceso de Paz se pone en marcha.

II.-Puesta en marcha del Proceso de Paz:

1) El Proceso de Paz: sus principales aspectos

Consciente de los límites democráticos que implicaba un régimen frente nacionalista, el gobierno decidió realizar una Cumbre Política a la que asistirían, con excepción de la guerrilla, representantes de diversos sectores de la sociedad. El restablecimiento de la Comisión de Paz en septiembre de 1982 constituyó otra de las medidas importantes para solucionar el problema de la violencia guerrilla-Estado⁵. La Comisión era el instrumento a través del cual el gobierno establecía el diálogo con los jefes subversivos. La amnistía concedida en noviembre de 1982 a todo guerrillero sindicado de delito político fue un tercer paso tendiente a preparar el terreno para el acercamiento entre las dos partes en conflicto.

Pero lo que merece ser resaltado es el hecho de que la Comisión contaba con la participación de dos muy importantes miembros de la jerarquía eclesiás-

4 El Catolicismo, 28 de agosto de 1983, El Tiempo, 9 de septiembre de 1983. Vale la pena advertir que las coincidencias de apreciación entre Iglesia y militares se dieron también en otros aspectos, entre ellos el de la educación, seriamente amenazada por la infiltración marxista. El Catolicismo también señala su preocupación frente a la buena acogida que ha tenido el marxismo por parte de algunos miembros de la Iglesia y destaca que "Es el servicio muy importante, por cierto, que los idiotas útiles están dispuestos a prestar a los que buscan implacablemente la revolución y el caos" (10 de febrero de 1985).

5 Una Comisión de paz ya había sido creada por Turbay en las postrimerías de su mandato; encargada de establecer contacto con la guerrilla, su función tan sólo le permitía sugerir propuestas al gobierno.

tica. Los Monseñores Revollo Bravo y Gómez Hoyos eran -y lo siguen siendo-, en efecto, figuras prominentes del alto clero: el primero de ellos, en el momento de ser nombrado miembro de la Comisión, era el arzobispo de Popayán y presidente de la Conferencia Episcopal; tampoco es inútil indicar que había sido director de El Catolicismo entre 1947 y 1966; Monseñor Gómez Hoyos era el presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá. Tenemos entonces que dos obispos participaban en una Comisión con el explícito fin de dialogar y negociar con los dirigentes guerrilleros.

Es cierto que la participación de estos dos jerarcas era únicamente a título individual, es decir que sus intervenciones en el Proceso de Paz no comprometían a la Iglesia; pero tal limitación no le resta importancia a la colaboración abierta y decidida que varios obispos le prestaron al Proceso de Paz. En efecto, por múltiples razones, fueron surgiendo otras comisiones y en casi todas ellas se podía observar la presencia de uno o varios obispos encargados de impulsar las negociaciones: Monseñor Sema, obispo de Florencia, fue uno de los tres Altos Comisionados de Paz; Monseñor Castrillón, obispo de Pereira, fue miembro de la Comisión de Negociación y Diálogo.

Una vez que estos instrumentos para alcanzar la paz entran a funcionar, los jerarcas de la Iglesia colombiana se dividen abiertamente. Las declaraciones que ofrecen a la prensa rinden testimonio de estas profundas divergencias del alto clero frente al problema que plantea la guerrilla y su posible reincorporación a la sociedad civil.

2) Los pre-modernistas o conservadores:

Estos aspectos, dentro del Proceso de Paz, constituían apenas el comienzo de aquella estrategia política cuyo objetivo era eliminar las causas objetivas que explicaban el descontento de la mayoría de los colombianos y la violencia guerrillera. El Proceso debía estar acompañado por la aprobación de una serie de reformas tanto políticas como socio-económicas⁶. Sin embargo, fue precisamente en este nivel inicial que se presentaron las primeras diver-

gencias; numerosas voces de protesta se alzaron para alertar a la opinión pública sobre el profundo riesgo que implicaba el hecho de sentarse a negociar con los alzados en armas. Si bien es cierto que los obispos que se manifestaban a través de las páginas de El Catolicismo se apresuraron a aplaudir, apoyar y reconocer los esfuerzos del nuevo gobierno en la búsqueda de la paz, hay que señalar, sin embargo, que esos mismo obispos comenzaron a lanzar al mismo tiempo un grito de alarma, especie de leitmotiv durante gran parte del Proceso; la primera parte del mensaje era un llamado a la sinceridad y a la honestidad de los sectores comprometidos en la búsqueda de la paz:

"Aplicar una amnistía es administrar el beneficio de un perdón en provecho del orden social. Se necesita, por tanto, que en todos exista un criterio de honradez..."

Pero seguía una segunda parte, mucho más extensa, en la que la claridad cedía rápidamente el puesto a la ambigüedad: en cuestión de unas cuantas líneas, el semanario pasa de las advertencias necesarias a una condena abierta:

Otra situación sería prescindir de la justicia y abusar de las buenas intenciones. No hay campo ni oportunidad de que intereses de turbio origen pretendan aprovecharse de determinadas circunstancias... En la responsabilidad de los gobernantes está el garantizar que el reintegro a la vida civil de gentes extraviadas de intento, no puede atrofiar la integridad de valores superiores y la perdurabilidad de la justicia⁷.

Nos interesa hacer énfasis en ciertos puntos que menciona o sugiere el diario. En primer lugar, aparece de manera muy clara que desde el inicio mismo del Proceso de Paz, un sector de la jerarquía eclesial mostró un profundo recelo hacia la actitud que podían adoptar los subversivos, que no eran más que gentes extraviadas de intento. Y, muy pronto, del recelo, de la desconfianza abierta, pasaría a una condena tajante de todo el Proceso. Todo parece indicar que ante la eventual reincorporación de los alza-

⁶Para una visión más completa del Proceso de Paz pueden ser consultados, entre otros, los trabajos de Bejarano, Ana María, El proceso de paz durante la administración Betancur (1982-1986). Resultados de un esfuerzo para ampliar el espacio de participación política en Colombia, tesis, Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política, Bogotá, 1987; Ramírez, Socorro, Restrepo, Luis A., op. cit.; Vasquez C, Alfredo, Betancur y la crisis nacional, Bogotá, Ediciones Aurora, 1986.

⁷El Catolicismo, 28 de noviembre de 1982.

dos en armas a la vida civil, en donde, gozando de derechos políticos, podrían constituirse en una fuerza considerable, los obispos que se expresaban a través de **El Catolicismo** olvidaron rápidamente aquellos males menores (corrupción, clientelismo, compra de votos...), para centrar todo su atención en lo que para ellos representaba la amenaza por excelencia: la legitimación de la guerrilla, es decir, en último término, la legitimación del comunismo.

Para tener una visión más completa en torno a la actitud asumida por **El Catolicismo** frente a la subversión y al Proceso de Paz, podemos citar otros ejemplos sumamente ilustrativos. Para el semanario no se trataba simplemente del rechazo absoluto al uso de la violencia como medio para remediar una situación determinada; en efecto, aparte de condenar la fuerza, **El Catolicismo** le negó el estatuto de guerrilleros a los alzados en armas; es decir, no estableció ningún tipo de relación entre la existencia de grupos subversivos y los problemas de todo tipo que afectaban a los colombianos. El cardenal López Trujillo, quizás uno de los más vehementes defensores del *statu quo*⁸, declaraba que él había sido "testigo de muchos casos de gentes pobres que se ingenian caminos de trabajo, por lo cual esa especie de causalidad fría, como si el desempleo a secas en nuestra gente miserable fuera el que produjera esa violencia y esas masacres, me parece que no es tan fácil de probar"⁹. En pocas palabras, según un sector de la Iglesia, las acciones de la guerrilla no estaban encaminadas en modo alguno a mejorar la sociedad colombiana. Por el contrario, sostenían altos jerarcas, los móviles de tales grupos obedecían a intereses completamente distintos:

No son pocas las ventajas que la amnistía proporciona de hecho a las organizaciones subversivas. Muchos de sus integrantes de la cárcel han pasado a la libertad y lógicamente no se van a quedar con los brazos cruzados. Por otra parte, una gran mayoría de los alzados en armas quieren seguir en sus andanzas y por ello abiertamente

rechazan toda forma de perdón legal. Saben y entienden que los cauces de la legalidad interfieren necesariamente el enriquecimiento fácil e impiden que los dineros mal habidos se incrementen en sus posibilidades... No están tantos jefes guerrilleros en capacidad de dominar a sus cómplices cuando estos no quieren dejar de lado sus ambiciones delictivas. No es fácil prescindir de las riquezas fáciles para entrar de lleno al trabajo honrado...¹⁰.

Y, unos meses más tarde, definiendo los límites que debía tener la amnistía:

Rehabilitar a los delincuentes es parte en los objetivos del bien común. Pero el hacerlo necesita de las precauciones necesarias para no incurrir en el engaño... El promover trabajo y empleo no puede ser un sistema de condescender con los criminales... Una sociedad amedrantada no vacila en ofrecerles a ¡os picaros y bandidos facilidades que no tienen, ni en sueños, las gentes de bien¹¹.

Más que un llamado de alerta dirigido al gobierno para que éste no descuidara ningún detalle en sus contactos con los picaros y bandidos, se trataba de un verdadero rechazo a la política de paz del Presidente Betancur. No deja de sorprender, en efecto, que este rechazo tan vehemente se manifestó muy pronto; es decir que **El Catolicismo** no concedió un compás de espera para juzgar al Proceso de acuerdo a sus resultados. Se tiene la impresión de que para el semanario, en el fondo, la política de paz estaba destinada al fracaso. En el primer semestre de 1983, el diario publicó un artículo, cuyo solo intitulado -"¿La amnistía, un estímulo al delito?"- constituye una feroz diatriba contra las medidas del gobierno¹². Asimismo, se denunciaron enérgicamente los excesivos privilegios y los excesos de condescendencia otorgados a los amnistiados¹³ -esencialmente la posibilidad de encontrar empleo-, señalando que se podía llegar a un nuevo espectáculo de privilegios¹⁴.

8 El periodista Daniel Samper P. anota, refiriéndose al cardenal López Trujillo, que se le reconoce, por una parte, como un hábil político que domina manejos electorales y manipula asambleas. Encarna, por otra parte, la línea más tradicional de la iglesia latinoamericana, El Tiempo, 2 de febrero de 1983.

9 La República, 31 de enero de 1982.

10 El Catolicismo, 5 de diciembre de 1982.

11Ibid., 29 de mayo de 1983.

12 Ibid., 29 de mayo de 1983.

13 Ibid., 22 de mayo de 1983.

14 Ibid., 29 de mayo de 1983.

El profundo pesimismo del clero conservador se resume muy bien en los siguientes apartes.

Es utópico pensar que un jefe guerrillero que no sabe más que manejar armas y emboscar al enemigo va a convertirse en un honrado agricultor... La causa última de por qué es imposible que los varios grupos alzados quieran de veras la paz, es porque están al servicio del plan de expansión mundial del comunismo¹⁵.

...quienes practican el materialismo y la lucha de clases son personas y entidades que no quieren la paz, por sistema y por convicción la repudian y hacen lo posible por destruirla. Que los marxistas quisieran la paz significaría desvirtuar su ideología¹⁶.

No sería honesto ilusionarnos con una paz im posible cuando lo que se quiere es la guerra y lo que se practica es el enfrentamiento. No hay para qué contribuir a la frustración social sumándonos a la masa de engañados¹⁷.

Sin embargo, como ya se dijo anteriormente, el sector conservador era apenas una de las tendencias en que se dividió la jerarquía eclesiástica colombiana con relación al Proceso de Paz. Paralelamente a los gritos de alarma lanzados constantemente por esta corriente, se podía escuchar un discurso mucho más condescendiente con la iniciativa presidencial.

2) Los modernistas o progresistas:

La pérdida de los valores morales, el alejamiento del hombre con relación a Dios, las terribles consecuencias de la infiltración marxista en la sociedad, etc., hacían también parte del análisis de la corriente modernista. Pero, a diferencia de la concepción que se vio anteriormente, en ésta son incluidos otros factores que presentan una relación más directa con la realidad del país. El obispo de Pereira, Monseñor Castrillón, estimaba, por ejemplo, que era necesario buscar una paz sólida que se apoye en

una importante reforma social¹⁸. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Revollo Bravo, es decir el representante oficial de la Iglesia colombiana y miembro de la Comisión de Paz, compartía plenamente estos propósitos:

La paz es el fruto de la justicia y mientras haya injusticia social, inmoralidad y un estado de depresión, no habrá paz; por lo tanto hay que acudir a la redistribución de la riqueza, hay que proporcionar trabajo y suplir las necesidades más urgentes del pueblo¹⁹.

El mensaje era perfectamente transparente: mientras que las injusticias sociales perduraran, la paz continuaría ausente. Y, avanzando aún más por estos caminos, Monseñor Castrillón no dudaba en afirmar:

La justicia es el fundamento sólido de la paz porque esas personas que están siendo víctimas de la injusticia, pueden por sí mismas rebelarse contra el desorden, contra ese desorden que mantiene a la sociedad en la injusticia, o pueden tener personas de esas querellas contra una sociedad que los menosprecia y los maltrata. Así surgen los grupos armados que pretenden representar los derechos de los desposeídos²⁰.

El obispo de Pereira compartía plenamente la concepción del problema de la violencia planteada por el Presidente Betancur, según la cual lo grave no era la existencia de la guerrilla sino las causas que explicaban su surgimiento:

La paz no significa una noticia de primera plana de que ya fueron muertos unos guerrilleros y que se han callado unos fusiles, porque el silencio de los fusiles puede significar el silencio de los hambrientos²¹.

Un sector de la Iglesia establecía entonces una estrecha relación entre guerrilla e injusticias socia-

15Ibid., 29 de mayo de 1983.

16Ibid., 10 de abril de 1983.

17Ibid., 5 de diciembre de 1982.

18La República, 18 de febrero de 1982.

19El Espectador, 21 de agosto de 1982.

20Ibid., 21 de agosto de 1982.

21El Colombiano, 10 de agosto de 1982.

les, compartiendo así la concepción del Presidente Betancur. Monseñor Serna, obispo de Florencia, quien se había venido reuniendo con dirigentes del M-19 desde finales del gobierno de Turbay y, como ya se dijo, era uno de los tres Altos Comisionados para la paz, definía el diálogo como camino necesario para encontrar soluciones a los problemas de la población, creados en gran parte por la debilidad del Estado:

*Escuchando las gentes y en el diálogo con la guerrilla, constaté en seguida un tremendo vacío del Estado. Este se manifestaba y aún se manifiesta en que no aparece ni para asegurar los bienes básicos, ni dar la seguridad social, ni garantizar la salud, la educación y la vivienda, ni para ejercer la justicia de las leyes. El diálogo fue efectivo para promover correctivos que eran justos aunque vinieran de la guerrilla*²².

3) Acuerdos de cese al fuego y reacciones :

A pesar de innumerables dificultades, el Proceso de Paz llegó finalmente a resultados concretos. En efecto, no sólo las múltiples y en ocasiones incoherentes reivindicaciones de una guerrilla desunida entorpecieron las negociaciones. Las relaciones extremadamente tensas entre la cúpula militar y las autoridades civiles²³, así como el débil respaldo concedido por los partidos tradicionales y el Congreso a la iniciativa presidencial, se opusieron igualmente al Proceso. Entre marzo y agosto de 1984, la Comisión de Paz firmó acuerdos de cese al fuego con varios de los principales grupos guerrilleros: exceptuando al ELN, los grupos guerrilleros más grandes, sin tener que entregar sus armas, se comprometieron a respetar una tregua durante un tiempo determinado. Por su parte, el gobierno debía exigir al ejército que cancelara provisoriamente sus operaciones contra-insurgentes y se comprometió a adoptar una política reformista que contribuyera al restablecimiento de la paz²⁴.

22 Monseñor Serna José Luis, "La paz: reflexión compartida", en ¿Paz? ¡Paz!, Bogotá, Leyva Duran Editores, 1987, pp. 104-05.

23 Vasquez A., op. cit., pp. 248-271.

24 Sin embargo, con excepción de estas condiciones generales, cada acuerdo presentaba sus propias particularidades, lo que obviamente se constituyó en un obstáculo para el buen desarrollo de las negociaciones. Para ver más detalles, cf. Bejarano Ana María, op. cit., p. 149.

25 Vanguardia Liberal, 3 de marzo de 1984.

26 El Siglo, 4 de mayo de 1984.

27 El Catolicismo, 27 de mayo de 1984.

28 Ibid., 12 de agosto de 1984.

¿Cómo reaccionó la jerarquía eclesiástica ante este paso que, en apariencia, auguraba otros aún más promisorios? La respuesta, nuevamente, debe darse en dos etapas, correspondientes, cada una de ellas, a las dos corrientes en las que se dividió el clero colombiano.

Unos días antes de los acuerdos de La Uribe, el cardenal Muñoz Duque reafirmaba la concepción unilateral sostenida por el clero conservador. Durante una visita a un batallón del ejército en la convulsionada zona del Magdalena Medio -en la que estaba presente la subversión, pero también el narcotráfico y los paramilitares-, la máxima autoridad de la Iglesia colombiana indicaba que la guerrilla era la responsable del caos que azotaba al país²⁵. Tan sólo unas semanas después del cese al fuego decretado pro las FARC, el cardenal López Trujillo decía que el país se estaba cansando del juego de la subversión²⁶. Inmediatamente después de la conclusión de los primeros acuerdos, un sector de la jerarquía eclesiástica persistía entonces en afirmar que el principal problema de la sociedad colombiana era la existencia de grupos subversivos. El Catolicismo ilustra claramente el pesimismo en torno a estos primeros resultados:

*Jamás la bienandanza se haría valedera y positiva si se buscara que la impunidad ejerciera un condominio con la justicia. No sería convivencia promisorio si se dejara franqueado el paso para que en la historia valieran lo mismo sus proceres que sus bandidos, sus patriarcas que sus traidores*²⁷.

Días después de la firma de los otros acuerdos, en agosto del 1984, un editorial titulado "El derecho de desconfiar", decía en particular que "los que a conciencia trabajan por la paz saben que nuestras colectividades disponen de muchos argumentos para esperar [los resultados de las negociaciones] con la inevitable y legítima desconfianza"²⁸.

Es indudable que para ese entonces, a pesar del acercamiento concreto entre guerrillas y gobierno, la violencia seguía presente en el escenario del país y que otros sectores comenzaban a dar muestras de inquietud. Los gremios y la clase política tradicional lanzaron una serie de ataques contra un proceso de paz que, según ellos, ya había ido demasiado lejos. Como lo señalan Ramírez y Restrepo, los gremios económicos y los dirigentes políticos, contando con todos los recursos de poder a su disposición y, ante todo, con la colaboración de cierta gran prensa, sometieron al gobierno a una presión desigual e insostenible²⁹. Poco a poco, el Presidente Betancur iba perdiendo el apoyo de influyentes sectores del país.

No obstante, estas críticas y este pesimismo contrastaban con la actitud defendida por los obispos progresistas. Estos preladados consideraban que el plan de paz de Betancur era la primera experiencia destinada a resolver el problema de la guerrilla por medios menos traumáticos y más eficientes; tal iniciativa, en un contexto tan complejo como el colombiano, era una tarea que demandaba una gran prudencia y una voluntad a toda prueba. Monseñor Castrillón, consciente de las dificultades inherentes al proceso, pedía a los ciudadanos dar muestra de cierta objetividad y, en cierto sentido, llegó a justificar la desconfianza del guerrillero hacia las promesas que le hacía el gobierno:

... hay que tener la paciencia del diálogo, un diálogo que tiene que ser generoso con quienes no son generosos... Debe haber gente entre los violentos que apenas están comenzando a oír hablar de ella [la amnistía] en una forma más clara y comenzando a ver si sería posible creer en ella, porque ha vivido en las zonas de enfrentamiento, porque recibe noticias de sus mismos grupos de que han sido engañados, porque quiso entregar las armas y no le ofrecieron trabajo, se le persiguió³⁰.

En la misma tónica, Monseñor Revollo Bravo -quien había sido nombrado nuevo arzobispo de Bogotá a mediados de 1984- afirmaba que a pesar de las dificultades del momento, éstas no debían

obnubilar la mente para intentar actitudes que realmente no van a ser la verdadera solución, sino por el contrario pueden agravarla más³¹. Contrariamente al clero reaccionario, que atribuía una importancia mínima a los acuerdos firmados con la subversión, Monseñor Gómez, miembro de la Comisión de Paz, otorgaba una gran consideración a dichos resultados, suficientes -según él- para devolver las esperanzas a quienes las habían perdido.³²

Este antagonismo en el seno de la Iglesia encontraría una nueva ocasión de manifestarse en relación a otro problema no menos candente, el del narcotráfico. Al tiempo que se desarrollaban las conversaciones con la guerrilla, otra forma de violencia empezó a manifestarse sólidamente. Es así como en el mes de mayo de 1984, la mafia ligada al comercio de la droga, presente desde años atrás, pero considerada hasta entonces como un problema menor, se manifestó de manera brutal como un nuevo factor de desestabilización: el asesinato del ministro de Justicia -Rodrigo Lara- era la prueba contundente de la sólida determinación de los narcotraficantes de arrasar con todo obstáculo que se opusiera a sus intereses. Unánimemente, las autoridades religiosas habían ya condenado, en repetidas ocasiones, las nefastas consecuencias a las que conducía este tipo de actividades. Pero el consenso no iba más allá de esta rechazo inicial; en efecto, dos meses después del asesinato del ministro, la opinión pública se enteraba de los contactos que el gobierno había establecido con los principales responsables de la mafia. Y así como sucedió con las guerrillas y los problemas socio-económicos, los obispos se mostraron incapaces de señalar un mismo camino para encarar este nuevo problema: nuevamente, la escisión se hacía en torno a aquellos que eran partidarios del diálogo con los narcotraficantes y los que, rotundamente, rechazaban estas iniciativas. El más reactivo a todo compromiso con la mafia fue Monseñor Serna:

El país está reclamando que se cancele cualquier aspecto de arreglo o conveniencia con estos señores que tanto mal le han causado al país, y si se les deja un poquito más de ventaja, cuántos males

29 Ramírez Socorro y Restrepo Luis A., op. cit., p. 218.

30 El Tiempo, 13 de febrero de 1984.

31 El Colombiano, 26 de septiembre de 1984.

32 Monseñor Gómez, Mi testimonio sobre el proceso de paz, en ¿Paz? ¡Paz!, Bogotá, 1987, p. 190.

*más traerían para esta pobre patria colombiana. A los narcotraficantes sólo se les puede escuchar tras las rejas*³³.

Pero hay que recordar que el obispo Serna era miembro de una de las comisiones del Proceso y que como tal participaba activamente en las conversaciones con los guerrilleros. ¿Por qué entonces este rechazo tan categórico cuando se trataba de hablar con otros sectores igualmente desestabilizadores y no menos poderosos, como venían de demostrarlo? Porque, en ese entonces, a la guerrilla se le concedía cierto *status* político que le permitía presentarse como una fuerza injustamente excluida del escenario democrático del país. Por el contrario, los narcotraficantes podían muy difícilmente apelar a argumentos similares. Monseñor Castrillon señalaba esta profunda diferencia que impedía confundir subversión con mafia, al afirmar que "la guerrilla busca a través de una nueva forma de guerra ciertas condiciones físicas que no están dadas", mientras que el narcotráfico "es una actividad que produce sustancias que destruyen al hombre"³⁴.

Sin embargo, si estaba plenamente de acuerdo en criticar implacablemente a los carteles de la droga, Monseñor Castrillón no compartía las acusaciones que Monseñor Serna dirigió al gobierno; es más, criticó la interpretación "maniquea e hipócrita" que se le estaba dando al diálogo con los narcotraficantes. Tenemos entonces que otro sector de la jerarquía se mostraba mucho menos inflexible en cuanto a los contactos con los capos del narcotráfico. Según estos obispos, entre los cuales se contaba Monseñor Revollo Bravo, los contactos que venía de realizar el gobierno con los narcotraficantes significaban un buen deseo de servirle al país, ya que el diálogo era el camino más civilizado³⁵.

La división entre los partidarios de entablar contactos y los que rechazan esta posibilidad podría

recordarnos aquella que se estaba dando con respecto a la guerrilla. Empero, hay que anotar que los obispos enemigos de las conversaciones con la mafia no se identificaban necesariamente con los que se oponían al Proceso de Paz. Y a su vez, el que un prelado apoyara el Proceso de Paz no significaba que estuviese de acuerdo en que el gobierno entablara negociaciones con los narcotraficantes. Aquellos jerarcas de la Iglesia que apoyaban el diálogo en un caso y lo rechazaban en otro, consideraban que las violencias provocadas por la subversión y por el narcotráfico no podían ser comparadas, ni en su origen ni en sus objetivos, lo cual implicaba que el gobierno tenía que darle un tratamiento diferente a cada una de ellas³⁶.

Para mediados de 1984, el balance del Proceso de Paz presentaba algunos puntos preocupantes. Si bien es cierto que los acuerdos de cese al fuego constituían un avance esencial en la búsqueda de la reconciliación, otros aspectos, estrechamente relacionados con la política pacificadora, eran menos halagadores: las reformas, tanto a nivel social como económico y político, continuaban ausentes. Para llevar a cabo las posibles reformas, el M-19 había insistido -y era parte del acuerdo firmado entre ese grupo y el gobierno- en la necesidad de convocar un "Gran Diálogo Nacional" que, reuniendo a los representantes de los más diversos sectores sociales, señalara los cambios que el gobierno debía impulsar. Ante esta posibilidad, el Episcopado hizo múltiples llamados de alerta para que el "Diálogo" no se convirtiera "en simple y forzado escenario de agitación ideológica", en el que las "instituciones" y los "mecanismos normales de participación" fuesen suplantados³⁷.

III Cambio de actitud de El Catolicismo

La tendencia conservadora de la jerarquía seguía pues caracterizándose por la honda desconfianza que le inspiraba la iniciativa del Presidente Be-

33El Siglo, 6 de julio de 1984.

34El Heraldo, 26 de julio de 1984.

35El Espectador, 23 de julio de 1984.

36Algunos capos de la droga, aprovechando su enorme riqueza, quisieron cambiar la imagen que de ellos presentaban los medios de comunicación: ofrecían dinero a diversos sectores de la sociedad, dinero que debía ser destinado a fines sociales. Monseñor Castrillon reconoció haber recibido dinero que los jefes del narcotráfico le habían ofrecido para destinarlos a obras de carácter social (Ver El Heraldo, 27 de julio de 1984). Por intermedio del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, el muy conservador Monseñor Rueda Hernández, la voz oficial de la Iglesia se elevó para condenar categóricamente la actitud del obispo de Pereira, afirmando que el fin, en ningún caso podía justificar los medios (ver El Colombiano, 28 de julio de 1984).

37El Catolicismo, 7 de octubre de 1984.

tancur; quizá sea más exacto decir que predominaba una profunda decepción, como si el Proceso de Paz hubiera sellado ya definitivamente su suerte:

No podría ser sino ingenuidad insostenible esperar que las promesas hechas, la tregua y los armisticios, tuvieran un mínimo siquiera de respaldo en la seriedad, mucho menos en la justicia... En los trabajos de la paz es contraproducente condescender o darles facilidades a aquellos que no disponen de capacidad de responder a la generosidad, pues su lenguaje es el de la ferocidad, sus ideales los de la matanza y su triunfo el de exterminar³⁸.

Todo el rechazo a la política de paz se encuentra resumido en el "sacrificio" al que hace mención el editorialista del semanario religioso. Sin embargo, hay que anotar que en su parte final, el artículo señaló claramente el estancamiento de la clase política como otra de las causas de la crisis colombiana. Primeros indicios de un cambio de actitud bastante significativo por parte del periódico:

Todas las personas y todos los sectores están llamados a tomar su parte [en la búsqueda de la paz], aun con sacrificio de puntos de vista muy legítimos y, si es preciso, conformando los criterios a las necesidades, como sucede, por ejemplo, con la ley del indulto... Es otra cruz que se le impone a la conciencia nacional acostumbrada al imperio de la legalidad y que a pesar de las fuertes razones que se le opusieron, habrá que aceptarla como una costosa contribución más a la paz en vista de sus posibles resultados... Son muchas más las cruces que hay que cargar a lo largo del camino de la paz. Así, por ejemplo, la ambigüedad de los acuerdos...; el inmovilismo ideológico que ha dejado a los partidos políticos como testigos mudos e ineficaces de todo este proceso³⁹.

En junio de 1985, el M-19 y el EPL anunciaron públicamente que rompían la tregua con el gobierno -firmada hacia tan sólo unos meses- y que retornaban a sus actividades guerrilleras. Profundas diver-

gencias en torno a lo que debía ser el "Diálogo nacional" explican, en parte, el fin de los acuerdos. Por otro lado, hay que señalar el hostigamiento de las Fuerzas Armadas aun hacia los grupos guerrilleros que se habían acogido a los acuerdos⁴⁰. Las relaciones entre el poder militar y el poder civil, tensas desde un comienzo, habían venido intensificándose notoriamente: las inculpaciones del Procurador a varios miembros del ejército; la renuncia de Morales Benítez dejando entrever que un sector de las Fuerzas Armadas se oponía al proceso de paz; la renuncia del Ministro de Defensa, general Landazábal, inmediatamente después de que el Presidente Betancur hubiera reafirmado firmemente su decisión de proseguir en las negociaciones con la guerrilla (enero de 1984), fueron algunos de los ejemplos que marcaron las delicadas relaciones entre el gobierno y los jefes militares, a los cuales hay que agregar la reiterada actitud desafiante asumida por el M-19 ante el gobierno y el ejército⁴¹. De la misma manera, el escaso interés en la adopción de reformas de fondo por parte de la clase dirigente contribuyó a que, paulatinamente, la guerrilla privilegiara nuevamente las soluciones de fuerza como medio para lograr sus reivindicaciones en detrimento de la vía política⁴².

A partir de ese momento, la violencia subversión-Estado se intensificó de sobremanera. Sin embargo, no todo estaba perdido: que una agrupación guerrillera, de las dimensiones de las FARC, permaneciera dentro del proceso, no resultaba nada deseñable. Mejor aún, este movimiento subversivo estaba listo para ofrecer a los colombianos una tercera alternativa política, independiente del bipartidismo tradicional: el movimiento guerrillero anunció oficialmente el lanzamiento de la Unión Patriótica en marzo de 1985. El principal problema que suscitó esta nueva organización estaba relacionado con el desarme: señalando los lazos evidentes que existían entre el movimiento guerrillero y la UP, la pastoral episcopal alertó de inmediato sobre el peligro potencial que representaba esta situación ambivalente, en la que los nuevos ciudadanos demócratas

38Ibid., 7 de julio de 1985.

39Ibid., 2 de junio de 1985.

40Dentro de los numerosos ejemplos, cabe recordar el caso del ataque al campamento de Yarumales a finales de diciembre de 1984; la presión ejercida por la cúpula militar para que el gobierno prohibiera una reunión de la subversión en Los Robles previsto para el mes de febrero de 1995.

41Ramírez Socorro y Restrepo, Luis A., op cit., p. 170.

42Bejarano Ana María, op cit., pp. 163-181. Ramírez y Restrepo llegan a conclusiones similares, op. cit., pp. 196-202.

no se distinguían muy bien de los hombres alzados en armas⁴³.

Las acusaciones lanzadas al mismo tiempo por dos representantes del alto clero contra el proselitismo armado de la UP, ilustran dos concepciones radicalmente diferentes en el interior de la jerarquía eclesiástica con respecto a una misma problemática. El arzobispo de Popayán, luego de haber denunciado estas prácticas, sostenía que el gobierno había concedido una excesiva confianza a las organizaciones subversivas, a pesar de lo cual estas últimas no habían respondido positivamente. Las autoridades debían entonces, concluía el prelado, buscar una nueva vía⁴⁴. Paralelamente, el obispo de Arauca temía que la presión de la guerrilla determinara los resultados de las próximas elecciones a la alcaldía. Pero enseguida, agregaba que estos temores no significaban una condena a la guerrilla, ya que "la Iglesia no es indiferente a la situación que han generado los grupos subversivos"⁴⁵. Y si el jerarca indicaba que la violencia no era el camino adecuado para solucionar los problemas, sostenía también que los campesinos de su departamento que habían optado por las armas lo habían hecho debido a la "frustración y a la desilusión porque no han tenido solución a sus necesidades más apremiantes". Hay que advertir que este obispo era Presidente del Comité de Defensa del hombre araucano. Podemos suponer que este cargo le permitía participar activamente en la búsqueda de soluciones a los problemas concretos de su región (inversión de las regalías petroleras en obras sociales, transporte en las zonas fronterizas, etc.). Se trataba entonces de alguien que, conociendo de cerca las dificultades de la población, era conciente de sus necesidades. Sin lugar a dudas, esta manera particular de comprometerse directamente con los sectores desfavorecidos explica la abismal distancia que separa la concepción del ala conservadora de la que sostienen los modernistas.

Sin embargo, este discurso, que hasta entonces había caracterizado exclusivamente a la tendencia "progresista" de la jerarquía, iba empezar a ser compartido por **El Catolicismo**, que, a partir de 1985, adoptó un tono diferente al acostumbrado para referirse a la situación del país. La visión unila-

teral y simplista, sin desaparecer del todo, dio sin embargo cabida a un tipo de análisis que tenía en cuenta los problemas socio-económicos y sus consecuencias sobre la población.

Este cambio se manifiesta por primera vez en marzo de 1985. En un mensaje pastoral en el que el alto clero denunciaba la práctica del secuestro y en el cual los movimientos guerrilleros eran acusados de cometer el *summum* de los crímenes y de las abominaciones. Pero después de haber largamente insistido en esta forma de violencia, el episcopado dio también otro sentido a estos crímenes, completamente nuevo dentro de la óptica de la jerarquía:

*Los amargos sufrimientos que vienen atormentando a nuestra Patria con los secuestros y extorsiones son, al mismo tiempo, una llamada con caracteres de urgencia, especialmente a los favorecidos con abundantes bienes de fortuna, a despertar la conciencia de la justicia social, a crear fuentes de trabajo... y a compartir cristianamente los bienes en busca de solución a tantas situaciones de miseria*⁴⁶

Y el documento concluía con una sentencia no menos perentoria:

Las situaciones de miseria son el caldo de cultivo de la inseguridad social.

Si bien es cierto que los obispos conservadores ya habían denunciado las injusticias sociales, lo hacían sin embargo de una manera tan tímida, que las críticas parecían tan sólo simples fórmulas de rigor. No sucede así en este texto: además de denunciar explícitamente el contexto social, se establece, y esto es sumamente significativo, una correlación entre este contexto y las manifestaciones de violencia a las cuales recurrían los movimientos guerrilleros. Por primera vez, el clero que se expresaba a través de las páginas de **El Catolicismo** reconocía que los alzados en armas no eran los únicos responsables de la terrible situación que vivía el país. A partir de este momento, los análisis **El Catolicismo** tendrían cada vez más en cuenta una serie de factores que contribuían también largamente a socavar

43 **El Catolicismo**, 6 de octubre de 1985.

44 **El Siglo**, 7 de septiembre de 1985.

45 **El Tiempo**, 1 de septiembre de 1985.

46 **El Catolicismo**, 3 de marzo de 1985.

las bases de la sociedad. Trátese de la "crisis del Estado" o "de la ineficacia de las clases dirigentes", el semanario adoptó claramente una nueva actitud, menos cautelosa ante la responsabilidad de las élites tradicionales. En junio del mismo año, luego del fracaso de una huelga general, el semanario, sin olvidar de felicitar a los colombianos por su "buen juicio", recordó, a renglón seguido, que los compromisos adquiridos con los sectores más desfavorecidos no habían sido cumplidos aún⁴⁷.

En un artículo titulado "El ocaso de los partidos políticos", el órgano oficioso de las autoridades religiosas ya había puesto en tela de juicio a las dos colectividades tradicionales:

*Crece cada día más el descontento y se generaliza la persuasión de que los partidos ya no tienen eficiencia. Es, en realidad, el resultado y la consecuencia de que las campañas electorales son la reiteración irrespetuosa de todas las promesas, la sucesión de anuncios fallidos... En no pocos casos el hacer política es una forma de negociar sin ética y sin responsabilidad... Ahora parece más de actualidad que parte de los descontentos mire con simpatía a los revoltosos y subversivos...*⁴⁸

Progresivamente, vemos cómo **El Catolicismo** se preocupaba por sostener un discurso crítico hacia los sectores dominantes. En septiembre, un artículo -"Las exigencias de la paz social"- presentaba un cuadro en el que el maniqueísmo cedía algo de terreno, dando paso a una posición que al fin tomaba en cuenta la complejidad de la situación:

M con los extremismos de la lenidad, ni con los excesos de la fuerza, se logra darle estabilidad al bien común. La paz social resulta como fruto de la justicia... Importantes sectores de la subversión y de la guerrilla no quisieron el diálogo de la paz e hicieron de la tregua una oportunidad para reagruparse en sus propósitos de lucha y de violencia... Más que organizarse para ganar electoralmente el uno al otro, los partidos políticos deben revisar sus programas para ofrecerle a la Patria las seguridades del orden social y de la paz. Uno de los factores que acreditan a la guerrilla es el del desgaste de las agrupaciones políticas... Otra sería necesariamen-

*te la situación y otras las perspectivas si nuestra clase política, en su generalidad, tuviera como exponentes y gestores a dirigentes de debida idoneidad... Nada de raro tendría que entre las múltiples causas de la violencia ocupara un puesto de importancia definitiva la de que los políticos no fueran primero que todo ciudadanos probos, experimentados en la honestidad, comprometidos a conciencia con la causa de la justicia*⁴⁹.

¿Por qué, de un momento a otro El Catolicismo adopta una concepción y un lenguaje en los que, contrariamente a lo que sucedió hasta finales de 1984, los problemas sociales y la firme crítica a las élites tradicionales aparecen ocupando un puesto de primerísima importancia? Disponemos de muy pocos elementos para aportar una respuesta satisfactoria a estas inquietudes. Por un lado, existe la posibilidad de que en un momento dado, el semanario de la jerarquía eclesiástica comprendió que ante la cada vez más delicada situación, lo más conveniente era presionar al Estado para que iniciara una política reformista de fondo; podemos imaginar que para lograr tal objetivo, el sector conservador se vio en la obligación de asumir una actitud mucho más crítica ante un régimen que poco había logrado en materia de justicia social. La crisis que envolvía al Estado era de tal magnitud, que seguramente las muy conservadoras autoridades de la Iglesia colombiana se percataron finalmente de que lo que estaba en juego no era simplemente el acordar o no unos beneficios a unas agrupaciones guerrilleras que desde tiempo atrás venían atacando el orden establecido. Las altas instancias jerárquicas terminaron aceptando que era todo el sistema de la sociedad -incluida la institución religiosa- el que, por una serie de aspectos bastante complejos -y no solamente debido a las acciones violentas de la subversión- amenazaba seriamente con derrumbarse si no se adoptaban urgentes medidas. En el fondo, la Iglesia trataba de conservar su posición central: pero en un contexto que se había vuelto tan convulsivo y violento y que presentaba la eventualidad de la reinsertión de la guerrilla a la sociedad, dentro de la cual podría jugar un papel determinante, las autoridades eclesiásticas se encontraron ante la obligación de redefinir sus intereses y sus prioridades. En otras palabras, si no se aceptaban ciertas reivindicaciones

47 Ibid., 30 de junio de 1985.

48 Ibid., 5 de mayo de 1985.

49 Ibid., 8 de septiembre de 1985.

que no provenían exclusivamente de la guerrilla, pues eran compartidas por amplios sectores de la población y que, además, no presentaban nada de revolucionario (reclamar una mejor justicia social, denunciar la corrupción de la clase política, señalar los abusos de las Fuerzas Armadas, etc.), la Iglesia corría el gravísimo riesgo de desconectarse del todo con una sociedad que, desde hace años, venía transformándose profundamente.

Tampoco es del todo descabellado -y es nuestra segunda hipótesis para tratar de explicar el repentino cambio realizado por El Catolicismo-, considerar que en cierto momento se dio una relación de poder en el semanario: el sector reaccionario habría perdido mucho de su ascendiente ante una corriente que presionaba por presentar a la opinión pública una visión que se acercara más a la realidad del país, visión dentro de la cual las diferentes élites no estaban exentas de toda responsabilidad.

IV. La toma del Palacio de Justicia o el fin del Proceso de Paz:

Aquellos que eran enemigos del diálogo con la guerrilla nunca dejaron de manifestarse. Y lo hicieron, de manera especial, en uno de los momentos más dramáticos de la de por sí muy atormentada historia colombiana: la toma del Palacio de Justicia (noviembre de 1985). Sectores de la jerarquía eclesiástica no dudaron un sólo instante en aprobar plenamente la manera como el ejército había respondido a la acción vandálica, criminal y terrorista⁵⁰ del M-19. Y de la condena de este hecho a la condena general del Proceso de Paz no había, para el clero conservador, sino un paso que fácilmente se podía dar. Los obispos de Caldas, Risaralda y Armenia presentaron a la opinión pública un análisis de la situación en el que reaparecían críticas que ya hemos escuchado, tales como la generosidad excesiva del gobierno y los móviles reales de la subversión (el crimen, el enriquecimiento ilícito, el odio de clases...)⁵¹.

Pero también se escuchó otro discurso. Mucho más prudente, se limitó, sin jamás emitir un juicio

de valor sobre los acontecimientos, a pedir que se continuaran apoyando los esfuerzos del Presidente Betancur en aras de la paz -Monseñor Revollo Bravo⁵² - y que se conjugaran todos los esfuerzos con el fin de reconstruir al país con dignidad y con un progreso auténtico mediante la adopción de profundas reformas sociales -mensaje del Episcopado⁵³.

La toma del Palacio significó un gran revés para el Proceso de Paz, el más rudo golpe al primer intento conciliatorio por acabar con una de las formas de violencia que sacuden al país desde hace ya varias décadas. La tendencia conservadora seguía manifestándose, pero El Catolicismo, que había sido uno de sus máximos representantes, había experimentado una notable evolución.

A partir de entonces, las críticas de amplios sectores de la sociedad se tornaron aún más feroces; el apoyo al Presidente, que había venido debilitándose a medida que la paz se alejaba, pareció desaparecer por completo. El Proceso de Paz, entendido como un mecanismo que hacía del diálogo la herramienta central para acabar con la guerra entre subversión y Estado, había llegado a su fin. En los pocos meses que le restaban al Presidente Betancur, la vía militar volvería a ser la solución privilegiada para acabar con la guerrilla. Y era tal la incredulidad frente a las posibles bondades del diálogo subversión-Estado, que las conversaciones iban a tardar muchos meses en reanudarse⁵⁴. La atención se centraba en la campaña presidencial. Todos los candidatos, aprovechando el aparente fracaso de la iniciativa de Betancur y el descontento general, proponían un cambio significativo en materia de orden público. La Iglesia no era ajena a tales sentimientos: desde los pulpitos y desde sus medios de comunicación se situaba, nuevamente como orientadora de la opinión pública. El clero conservador y el progresista seguían manifestando sus planteamientos frente a los diversos problemas del país. Sin embargo, el momento no estaba como para triunfalismos: se trataba de restablecer cierto optimismo en el seno de una sociedad sacudida por todo tipo de violencias.

50Ibid., 17 de noviembre de 1985.

51 Ibid., 17 de noviembre de 1985.

52Ibid., 17 de noviembre de 1985.

53Ibid., 1ro de diciembre de 1985.

54Fue en mayo de 1984, es decir en la mitad de la presidencia de Barco, que el gobierno accedió, ante la creciente presión de amplios sectores de la sociedad, a reinventar una estrategia conciliadora para solucionar el problema de la subversión.

Conclusión:

El Proceso de Paz del Presidente Betancur no ofrecía, en las postrimerías de su mandato, un panorama muy reconfortante: la guerrilla seguía, igual que a comienzos de su administración, en pie de guerra y una nueva fuerza de desestabilización, la mafia de la droga, comenzaba a sembrar el terror en el país. Empero, había un elemento que no existía cuatro años atrás: un partido político surgido de la guerrilla. Este no era, sin embargo, el único resultado positivo que heredaría el nuevo gobierno. La experiencia Betancur, con todas sus innegables fallas y con sus innumerables contradicciones, constituye, indudablemente, una fecha esencial en la historia de nuestro país. Esta iniciativa significó, a corto plazo, una toma de conciencia con relación a un problema que hasta entonces había sido subestimado por las clases dirigentes y por la mayor parte de la población urbana. A partir de la administración Betancur, amplios sectores de la clase política empezaron a conceder una gran importancia al diálogo como instrumento para lograr la pacificación del país. El presidente Barco, luego de haber rechazado durante dos años la experiencia de su antecesor, terminó adoptando una Iniciativa de la Paz, dentro de la cual las negociaciones políticas con la subversión permitieron la reinserción del M-19 a la vida civil. El gobierno de Gaviria prosigue en ese camino: la solución debe buscarse, en primera instancia, a través del diálogo; más aún: otros protagonistas de la violencia, como los carteles de la droga, han entrado también en negociaciones.

La repercusión de la iniciativa Betancur en los diferentes sectores de la sociedad colombiana ha sido tan amplia, que aún los sectores tradicionalmente hostiles a las negociaciones con las guerrillas han variado su óptica: hoy en día, por ejemplo, son varios los voceros oficiales de la Iglesia los que pregonan no ya el rechazo al diálogo sino la reconciliación a través del diálogo. Todo parece indicar que este cambio que comenzó a apreciarse en **El Catolicismo** ha seguido ganando algunos adeptos dentro de la muy conservadora jerarquía eclesial colombiana: las denuncias a un sistema político y social excluyentes e injustos, así como la insistencia en la reanudación de diálogos con la subversión ya no son compartidas únicamente por unos cuantos obispos. Sin llegar al extremo de imaginar que la Iglesia colombiana ha roto por fin con ciertas tradiciones injustificables con el mundo de hoy, se puede quizás afirmar que, en lo que concierne lo político y lo social -mas no lo moral- aumenta, aunque sea tímidamente, el número de obispos que ya no se identifican del todo con los planteamientos netamente conservadores que han caracterizado a la Iglesia en nuestro país. Si bien es cierto que aún existen sectores políticamente tradicionales, el Presidente Betancur logró convencer a una buena parte de la muy conservadora Iglesia colombiana que la solución no era, como pretendió serlo anteriormente, a sangre y fuego.